

**El conflicto armado requiere menos póker y más
ajedrez. ¿Por qué?
Revista Credencial
Edición 255
Febrero de 2008**

Carlos Alfonso Velásquez, coronel retirado del Ejército Nacional, da luces sobre el estado actual de una guerra que este año costará 3.4 billones de pesos.

A finales del año pasado El Tiempo llamó la atención sobre el presupuesto castrense en el artículo Gasto militar del 2008 crecerá tanto que se teme por finanzas del Gobierno y balanza comercial. En él se informaba que "los 3,4 billones de pesos que requiere el Ministerio de Defensa para renovar los equipos de transporte y la dotación de los 13.000 hombres que se incorporarán en el 2008 a las diferentes fuerzas - armamento incluido- están garantizados, pero a costa de la inversión en otros sectores". También se daba cuenta del aumento de la inversión militar, que pasa de 1,1 billones en el 2007 a los 3,4 billones planeados para este año.

Analistas como Juan Camilo Restrepo y José Fernando Isaza han expresado su preocupación al respecto, subrayando, por ejemplo, que el 82.1 por ciento de los cargos públicos del área central estarán ocupados por funcionarios de los sectores de defensa, seguridad y policía, y que el gasto no solo se ha disparado (llegando hoy a representar cerca del 6.5 por ciento del PIB, punto máximo de la tendencia creciente que inició en 1991 cuando estaba en el 2 por ciento) sino que, además, equivale a la suma de todas las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental.

Es claro pues que, desde la perspectiva presupuestal, el conflicto armado está en escalada. Pero si miramos hacia su

posible solución, es decir hacia la pacificación del país, hay que decir que se encuentra atascado. Un contrasentido al que bien le cabe la analogía aquella de la vaca que pateando afanada por salir del pantano se entierra más ¿Cómo se explica? Colocando la mirada en la conducción político-estratégica desde el Estado.

La prueba de fuego, el test final para valorar dicha conducción, cuya responsabilidad recae en el Presidente de la República, depende de la respuesta al interrogante de ¿nos estamos acercando a una paz estable?

Un contrasentido de la misma índole se dio, aunque de manera definitiva, en otro conflicto de similares características: la guerra del Vietnam. En su fase final los E.U. movilizaron -entrando y saliendo del campo de combate- cerca de un millón de miembros de las fuerzas militares por año, para lo que requirió de diversos medios de transporte para abastecerlos de armas, municiones, alimento, vestido, alojamiento, amén de mantenerlos en buenas condiciones de salud.

Dicho de otra manera, la proyección de un ejército de ese tamaño se constituyó en una labor logística y administrativa de enormes dimensiones, llevada a cabo exitosamente. Y como si el despliegue logístico fuera poco, el Ejército estadounidense siempre salió victorioso en el campo de batalla. Combate tras combate las fuerzas del Vietcong y del Ejército norvietnamita sufrieron cuantiosas y dolorosas pérdidas. La proporción final de bajas en combate fue de 1 norteamericano muerto por cada 7 de los oponentes. Sin embargo, la potencia americana perdió la guerra.

En el Vietnam se dio la paradoja de victorias tácticas apoyadas por un impresionante apoyo logístico, al tiempo con una derrota estratégica.

El punto a destacar es que lo decisivo en las guerras de tipo irregular está en las aristas de lo político, que juega el rol central aun en los momentos en que lo que más se oye son los términos altisonantes de la polarización y el ruido de las armas. Por esto, si lo que acontece en el campo de combate no contribuye a lograr la paz, una de las principales razones de ser de los Estados, sino a prolongar la guerra, la conducción político-estratégica es equivocada o sencillamente se ha quedado corta en el ámbito de lo táctico.

Es más, en el mejor de los casos, aumentar el presupuesto en esas condiciones es solo gasto, nada de inversión, y en el peor, equivale a echarle dinero a un barril sin fondo.

Posiciones de fuerza (políticas) de las FARC

Si en la guerra irregular el rol central es desempeñado por lo político, conviene analizar este aspecto de las Farc. Para ello parto de unos presupuestos: pese a su acelerada degradación, su lucha sigue siendo por el poder político y a este fin subordinan y justifican todos los medios, incluyendo los secuestros, las acciones terroristas, el narcotráfico, etc. Sus jefes conciben la legitimidad política -soporte del poder que buscan- como algo directamente proporcional a las posiciones de fuerza que, con respaldo en la violencia, asumen frente a los gobiernos y, en general, a quienes se les oponen.

Quizás creen que logrado el "respeto por la fuerza", lo demás, admiración, acatamiento etc., viene por añadidura. No entienden la legitimidad ligada a características tales como rectitud moral, honestidad y credibilidad. Son mucho más del lado de la virtù maquiavélica que de la areté aristotélica. La ideología de sus dirigentes se puede sintetizar como marxista-leninista criolla, con oportunistas ingredientes bolivarianos.

Con base en lo anterior, la evolución de la fuerza política de las Farc se observa siguiendo lo acontecido con el "intercambio humanitario" desde 1997, año en que coincidieron tanto el tope de la curva ascendente de su periplo revolucionario como el comienzo de la colocación del tema en la agenda pública.

El cenit de dicha curva fue alcanzado cuando -como rédito de la ofensiva militar iniciada en 1996 con el asalto a la base de Las Delicias- exigieron el despeje militar de Cartagena del Chairá y entregaron unilateralmente setenta soldados en 'ceremonia militar' realizada frente a medios de comunicación y testigos nacionales e internacionales ante quienes, además, se presentaron como respetuosos del DIH. Fue este un fuerte paso con la mira puesta en el estatus de beligerancia.

Tan seguros se sintieron de su fuerza que Marulanda anunció esa como la última vez en que unilateralmente entregaban "prisioneros de guerra"; de ahí en adelante sería mediante la figura del "canje".

Y fue tal el impacto de este rédito para las Farc que una salvaje retaliación no demoró en llegar. Al mes se perpetró la masacre de Mapiripán, que, según serios indicios, fue fruto de una conspiración entre los paramilitares de Urabá e importantes oficiales de la Fuerza Pública.

El año siguiente ocurrió el asalto a Mitú (primero a una capital de Departamento), pero la reacción de las Fuerzas Militares marcó el comienzo de la curva descendente de las Farc. No obstante, el gobierno, consecuente con el 'voluntarismo de paz' imperante en ese entonces, siguió adelante con los preparativos para iniciar el proceso de paz.

La negociación como necesidad, que puso en evidencia el Presidente con sus actitudes y posiciones políticas, unida a la fuerza política que, desde su perspectiva, tenían en ese momento las Farc, permitió a sus jefes 'hablar duro' al iniciar las conversaciones del Caguán: exigieron la desocupación total de los cuarteles del Batallón Cazadores, Marulanda dejó la silla vacía en la inauguración y al poco tiempo congelaron las negociaciones unilateralmente.

Sin embargo, poco a poco fueron bajando el tono y cuando se hizo insostenible mantener la figura de negociar en plena guerra, trataron de neutralizar el clima de opinión adverso aceptando la propuesta de pactar una tregua y, especialmente, un 'intercambio humanitario' en el que, en contraprestación por la excarcelación de 15 guerrilleros, las Farc entregaron cerca de 350 hombres entre soldados y policías que habían caído en sus manos durante la ofensiva 96-98. De esta manera aparentaron 'sentido humanitario', pero en realidad aprovecharon para quitarse de encima un enorme peso logístico. Eso sí, mantuvieron como rehenes los mandos (oficiales y suboficiales), los mismos que, al lado de las y los políticos secuestrados, conforman hoy lo que llaman "canjeables".

Lo de destacar es que a esas alturas, mediados de 2001, la correlación de fuerzas a favor de las Fuerzas Militares ya había variado, entre otras razones porque el Plan Colombia llevaba dos años de ejecución. Esa variación explica en buena parte el desenlace del 'intercambio humanitario'. Lo cierto es que al finalizar el gobierno Pastrana las posiciones de fuerza de las Farc habían menguado sensiblemente y su fuerza política estaba prácticamente en cero.

Cruces estratégicos Gobierno-Farc

Gracias al 'voluntarismo de paz' frustrado, lo que desde 2002 vive la mayoría de colombianos -fruto también del liderazgo presidencial- es un 'voluntarismo de guerra' adobado por una variable polarización política.

Pese a la debilidad en lo político que acusaban las Farc al inicio del gobierno Uribe, este decidió cerrar todas las ventanas de oportunidad políticas incluyendo el posible 'acuerdo humanitario' (recordar el fallido rescate militar del gobernador de Antioquia, el ex ministro Echeverri y varios militares).

Uno de los puntos de apoyo de la estrategia gubernamental para solucionar el conflicto ha sido tratar de eliminar cualquier viso de estatus político de las Farc. Y en esta dirección, el Presidente Uribe ha tratado incluso de eliminar del léxico el concepto de conflicto armado, argumentando que lo que tenemos es una amenaza terrorista contra una democracia en proceso de profundización.

Uno de los propósitos centrales ha sido pues borrar la connotación política del conflicto, dejando abierta solo la opción estrictamente militar para acabar con las Farc. Parecería ser que nuestro Presidente vio que lo que más cuenta para esa guerrilla son las posiciones de fuerza, y, aplicando la misma fórmula, las ha menospreciado no dándoles ningún tipo de reconocimiento político después de más de tres décadas en que o bien lo tuvieron de facto o bien fue reconocido directa o indirectamente por todos los gobiernos.

Lo cierto es que por su conducción y ejecución, la Política de Seguridad Democrática ha sido percibida más como de guerra contra las Farc que de seguridad. La lógica en el trasfondo sería 'a más derrota militar más seguridad'. Dicho de otro modo, en la práctica la seguridad se constituyó en un fin y no en uno de los medios para llegar a unas negociaciones de paz con las Farc que fueran aceptables para los colombianos. Esto se corrobora con el Plan de Desarrollo, donde implícitamente se considera que si se resuelve el problema de la seguridad los demás tenderán a resolverse.

En contrario se podrá argumentar que el proceso de paz con las Auc y el atascado con el Eln desmienten lo antes afirmado. Sin embargo, coincido con otros analistas cuando señalan que con ellos el gobierno ha buscado simplificar el escenario de la guerra para así enfocar todo el esfuerzo en la derrota militar de las Farc.

Lo anterior se ha reflejado en el manejo del 'acuerdo humanitario'. Cada vez que el tema se ha privilegiado en la agenda pública, el gobierno trata de asumir la iniciativa, sin lograrlo, y plantea propuestas que se sabe de antemano van a ser rechazadas por las Farc, o tomando decisiones incluso desconcertantes como la de excarcelar unilateralmente a Granda y otros guerrilleros. El problema está en que, preocupado por impedir el juego político de la guerrilla, ha sido errático en este manejo y, lo peor, ha ido dejando la iniciativa en manos de otros actores internacionales, lo cual trae consigo la peligrosa e impredecible ocasión de que haya interlocución directa entre gobiernos de terceros países y las Farc.

A su turno la guerrilla, con todas las puertas para actuar políticamente cerradas, ha buscado recuperar la connotación política que les ha querido quitar de tajo el Presidente con la ventana de oportunidad que les brinda el asunto.

Es más, hay que reconocer que las Farc han actuado con una buena dosis de flexibilidad estratégica. Mientras el gobierno ha tenido indudables avances y éxitos priorizando el esfuerzo en lo militar para el control territorial, y en últimas para la derrota, sus jefes desecharon, por ahora, el territorio y el poder local al mismo tiempo que retornaron a la clásica guerra de guerrillas, buscando desgastar física y psicológicamente a las Fuerzas Militares, aunque su principal esfuerzo lo han empleado en la que denominan 'guerra de rehenes'. Dicho de otro modo, decidieron presionar por el lado que detectaron más vulnerable en el Gobierno.

El punto es que, contrario a sus propósitos, el Presidente le ha facilitado a la guerrilla conservar esa 'arma' para actuar políticamente fuera de nuestras fronteras. Es paradójico que hoy en día el conocimiento internacional de la sigla Farc supere al de cualquier partido político del país. Después de poco más de cinco años trabajando para borrarlos del mapa político, se les menciona, aunque para mal, en los principales noticieros y diarios del mundo occidental. Asunto diferente es si podrán recuperar imagen aprovechando el conocimiento del que ya gozan ¿Entregarán gradual y unilateralmente otros secuestrados a través de gobiernos diferentes al colombiano, a cambio de reconocimiento político como punto medio entre terrorismo y beligerancia?

La reciente gira del presidente Uribe por Europa, a raíz de la propuesta formulada por Chávez de otorgarles beligerancia, fue en general exitosa. No obstante, hubo unas peticiones del presidente francés reforzadas por el gobierno de Suiza que tuvieron muy poco despliegue en los medios de comunicación: "No excluir ningún concurso útil" (¿Chávez?) para permitir la liberación de los secuestrados y que ofrezca "garantías de independencia y márgenes de discusión,

indispensables para su éxito" en la mediación que asumirían con España y Suiza.

A modo de conclusión

Desde la perspectiva estratégica, dejar al margen las connotaciones políticas del conflicto es una apuesta arriesgada. Al privilegiar solo lo militar se entra de lleno en la dinámica aquella de que "cuando la guerrilla no pierde, gana, y cuando el gobierno no gana, pierde". De otra parte, se deja la puerta abierta para sorpresas estratégicas provenientes de lo político, siempre tan impredecible.

Salir de dicha dinámica implica asumir la iniciativa política empezando por el 'acuerdo humanitario'. Para lograrlo hay que permitir que el oponente también actúe políticamente y en ese intercambio demostrar la superioridad tanto moral como política.

Ya Colombia hizo el tránsito del 'voluntarismo de paz' al 'voluntarismo de guerra'; lo que hoy necesita para desatascar el conflicto es una verdadera estrategia de pacificación, recordando que su conducción requiere más ajedrecistas que jugadores de póker.